ESPAÑA EN UN NUEVO MUNDO

José María BENEGAS

Aunque el origen de la idea sea probablemente muy anterior, se atribuye con frecuencia a Oscar Wilde la recomendación de que seamos cautos con los propios deseos, pues corremos siempre el riesgo de que lleguen a realizarse. La experiencia del primer año de la década de los noventa justifica sobradamente el consejo: se ha cumplido el deseo que muchos teníamos de que se terminara la división del mundo en dos bloques y desaparecieran las dictaduras comunistas en los países de Europa central y oriental y en la Unión Soviética, y ahora nos encontramos con una situación totalmente nueva, y, por qué no decirlo, cargada de incertidumbres y de graves problemas.

Un nuevo mundo

distinto en los conservadores occidentales y en los socialistas democráticos de todo el mundo. Pero ahora las incertidumbres y los problemas nos afectan a todos: los halcones de la guerra fría, o por los menos los más lúcidos, son bastante conscientes de que el colapso de los regímenes comunistas, aunque lo celebren como un triunfo personal, les enfrenta ahora a un nuevo mundo en el que no están escritas las reglas de juego, no se sabe muy La democracia ha llegado al Este sin un sistema de partidos democráticos capaces de expresar y realizar las demandas populares.

bien el número y la identidad de los jugadores, y ningún árbitro parece capaz de controlar el juego violento de los más agresivos entre los recién llegados.

Los propios deseos son peligrosos al realizarse no porque fueran sueños equivocados, sino porque traen consigo consecuencias indeseadas y su realización suele tomarnos de improviso. Las razones de los socialistas para desear el final de un mundo dividido en bloques eran justas: el equilibrio del terror puede haber sido eficaz para evitar la guerra durante cuarenta años, pero no podía ser la base de un orden mundial pacífico. Nosotros no pensábamos en términos de victoria de un bloque, sino de superación progresiva del antagonismo y de aceptación por parte soviética de unas reglas de juego civilizadas.

Eso era lo que parecía haberse conseguido con la Carta de París a partir de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), y lo que en parte se ha perdido con la proliferación de declaraciones de independencia y de conflictos locales, poco comprensibles y bastante sangrientos en la antigua Yugoslavia, y todavía larvados en la antigua Unión Soviética, aunque querríamos confiar en que la recién nacida Confederación de Estados Independientes (CEI) fuera capaz de encauzarlos. Todo un mundo se ha venido abajo, y el hecho de que ese mundo no nos gustara no puede impedir que veamos los enormes riesgos que ahora se abren, desde los conflictos étnicos y nacionales a la alarmante

posibilidad de uso discrecional de armamento nuclear, táctico o no.

También eran justas las razones de los socialistas para desear el final de las dictaduras comunistas y la llegada de la democracia a aquellos países. Pero la democracia ha llegado sin un sistema de partidos democráticos capaces de expresar y realizar las demandas populares, sin un sistema político articulado capaz de garantizar la nueva gobernabilidad democrática. Y, para colmo, en condiciones de una crisis económica gravísima que convierte en una aventura la sobrevivencia diaria de los ciudadanos, y para la que las recetas de ajuste económico, por la carencia de margen de maniobra y por las dimensiones del cambio que se quiere introducir, conducen con toda probabilidad a una sucesión de ajustes convulsivos, de poca o lenta eficacia económica y de consecuencias sociales rápida y dramáticamente negativas.

Nadie tiene soluciones mágicas para semejante desafío, pues no existe experiencia histórica similar de colapso de un sistema de propiedad estatal en países de semejantes dimensiones territoriales y demográficas. Y estamos ante la paradoja de que, si bien no se puede creer en quienes ofrecen recetas rápidas y milagrosas, tampoco es posible dejar de apoyar (y de intentar racionalizar) las propuestas económicas de unos equipos con poca experiencia y nulas garantías de estabilidad y eficacia, por la sencilla razón de que los pueblos de estos países prefieren ya dar un salto en el vacío a seguir contemplando el rápido hundimiento de su vida privada y colectiva mientras los gobernantes vacilan ante los riesgos o utilizan los planes alternativos para resolver sus disputas por el poder.

Se diría que en una situación como ésta de poco sirve la racionalidad: no se sabe *la* solución, pero es preciso optar por *alguna* solución, pues los pueblos prefieren el riesgo de un final terrible a la certeza de un terror sin fin. Ante la urgencia de situaciones imprevistas, consecuencias indeseadas del deseado final de un mundo dividido en bloques, se produce así una aparente impotencia de la razón, y no cabe asombrarse de que sean muchos quienes sobre todo allí, pero también aquí, busquen una seguridad intelectual en el fundamentalismo racial, nacional o religioso. Cuando no se conoce con certeza la propia identidad siempre queda la pobre solución de definir con certeza a un enemigo imaginario: el otro, el ajeno, nos permite obtener una imagen especular de un nosotros incierto.

Junto con sus consecuencias imprevistas, los deseos suelen tener el don de realizarse en el momento aparentemente menos oportuno. Y así ha sucedido con el colapso de las dictaduras comunistas: ha venido a coincidir con el momento más delicado de la construcción de Europa, con el salto de la Comunidad a la Unión Europea. Es posible que la vida, por usar una palabra tan querida a Mijail Gorbachov, vaya siempre más deprisa que las previsiones de los hombres, como él mismo ha comprobado. Para la Comunidad, la guerra del Golfo fue ya una dura prueba que mostró la necesidad de avanzar más rápidamente hacia una política exterior y una política de seguridad comunes. Pero con el estallido de la Unión Soviética, tras el fracasado golpe de agosto de este año, como ante la guerra entre Serbia y Croacia, son muchos los que han pensado que Europa ha fracasado, que no ha logrado darse una voz única en un momento en el que le correspondía un papel central en el drama del fin del siglo.

En este punto quizá convenga discutir la vieja frase: un pesimista es un optimista bien informado. Ciertamente, cuando se acumulan los problemas y se tiene buena información sobre ellos, incluso los más optimistas pueden verse tentados por el pesimismo. Pero quizá sea más preciso decir

que un pesimista es un optimista abrumado por la información, y que no ha tenido tiempo de reflexionar sobre las salidas y los plazos de los problemas. Quizá, con buena información y cierta reflexión, podamos seguir siendo optimistas, y seguir apostando por la racionalidad. Creo que éste debería ser nuestro caso, como país integrado en la Unión Europea, a comienzos de este simbólico año de 1992.

Pues hay razones para el optimismo y razones para pensar que una estrategia racional puede imponerse a medio plazo y lograr que en toda Europa, y a fin de cuentas en el mundo, se logre un nuevo orden mundial pacífico y cooperativo. Y, lo que es más importante, hay razones para pensar que la Unión Europea presenta para España y para Europa el núcleo de esa estrategia racional.

Europa no ha fracasado por no haber podido impedir que el final de la política de bloques haya tomado la forma de un estallido de la Unión Soviética y de Yugoslavia. Las dimensiones de la crisis del antiguo bloque soviético (que ha arrastrado a la no alineada Yugoslavia), tanto en el plano político como en el económico y el social, desbordaban y desbordan no sólo a la Comunidad Europea, sino a Estados Unidos y al resto del mundo. No existía ni existe poder político y económico capaz de determinar el proceso interno de estos países, especialmente la Unión Soviética. Sólo se podía influir sobre él, y Europa cumplió su papel en el momento del golpe de agosto.

El colapso de las dictaduras comunistas ha venido a coincidir con el momento más delicado de la construcción de Europa.

Que la Unión Europea no se haya estancado en estos momentos supone ya un paso adelante casi decisivo.

España, en particular, fue uno de los primeros países que condenó tajantemente el golpe, y la voz de los países de la Comunidad, aunque no fuera una voz única sino un coro con desafortunadas salidas de tono, se dejó oír y fue una de las razones para el desistimiento de los golpistas.

Igualmente, pedir ahora que la Unión Europea resuelva los problemas de la CEI o garantice la paz en Yugoslavia equivale a pensar que es responsabilidad propia dar solución a los problemas más cercanos. Nos afectan más, es cierto, nos son más inmediatos, pero lo más que se nos puede pedir es que influyamos positivamente, no que seamos el deus ex machina que los resuelva de raíz. Estamos una vez más ante el viejo espejismo de que si no podemos resolver los males del mundo es porque somos culpables de ellos. Pero esa mala conciencia carece de racionalidad, aunque responda a sentimientos muy antiguos.

Lo cierto es que si la Unión Europea estuviera más consolidada se evitarían ambigüedades que pueden conducir a algunas de las fuerzas emergentes en el Este a meterse en callejones sin salida. Una voz única eliminaría incertidumbres y haría a todos los interlocutores más responsables. Esa es la razón por la que la comunidad internacional habría preferido que de la crisis de la Unión Soviética no surgiera una lábil Confederación de Estados Independientes sino una nueva Unión basada en la libre voluntad de las Repúblicas. Pero hay que admitir que, si bien el tiempo del mundo trabaja hoy a

favor de las dinámicas de integración supranacional, la antigua Unión Soviética tenía su propia temporalidad, que apuntaba hacia la desintegración.

Si nos dejamos llevar por las emociones, entonces, es fácil caer en el pesimismo, subrayar las analogías con la Europa de entreguerras y el auge del fascismo, el actual incremento del racismo y la xenofobia, el clima de fundamentalismos (cristianos o islámicos), la histeria nacionalista, las incertidumbres militares (tantas cabezas nucleares sin control), la previsible marea de inmigrantes del Este y del Magreb, su capacidad para realimentar el racismo, y así sucesivamente.

Y, sin embargo, la posición racional, hoy, no es la del pesimismo y los lamentos por un supuesto fracaso de Europa, sino la de seguir el camino que marca el tiempo del mundo y que se ha visto, pese a todos los malos augurios, confirmado en la cumbre de Maastricht. La Unión Europa es ya una realidad, no todo lo avanzada que algunos quisiéramos, pero una realidad que ha nacido pese a los vientos en contra, pese a la fatal atracción que los acontecimientos del Este ejercían en muchos casos sobre algunos políticos y parte de la opinión pública. Que la Unión Europea no se haya estancado en estos momentos supone ya un paso adelante casi decisivo: cuando el entorno acentuaba las tendencias centrífugas, se ha podido consolidar un núcleo denso, política, social y económicamente, con una poderosa tendencia centrípeta a medio plazo.

Lo logrado ya, y cualquier cálculo racional, muestran que la mejor apuesta es la tenacidad, para España y para los demás países de la Unión Europea. Nadie puede prever cuál será la evolución próxima de los países de la CEI, y en términos políticos hay grandes interrogantes sobre la Europa central y oriental. Pero la Unión Europea no

sólo posee su propia lógica de consolidación, sino que la tenacidad en ese proceso es la apuesta más racional para invertir la dinámica de desintegración abierta en el Este. Frente al inmenso agujero negro abierto por el colapso de la antigua Unión Soviética, sólo la realidad de ese núcleo denso que cada vez más debe llegar a ser la Unión Europea puede invertir la tendencia, crear un polo de referencia e introducir un discurso de racionalidad no sólo económica, sino sobre todo social y política, en ese desierto de confusión dejado por el colapso de los regímenes comunistas.

Para ello es preciso crear los mecanismos que aseguren una política exterior y una política de seguridad comunes. Volviendo a lo ya dicho, no hay que pensar que esas políticas comunes habrían podido evitar en lo sustancial el proceso soviético de desintegración. Pero ante la nueva realidad son imprescindibles para hacer frente a la caótica situación de la CEI y evitar que ésta arrastre en su misma dinámica a los países de Europa central y oriental.

La Unión debe fijar unas reglas claras de juego diplomático, para evitar que las diferencias entre sus miembros favorezcan la irresponsabilidad de las nuevas Repúblicas independientes en sus compromisos exteriores o en su política interna, particularmente en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos y de los derechos de las minorías. Parece evidente que los riesgos en este campo son suficientemente elevados como para extremar la cautela, y poca credibilidad y fuerza tendría la Unión si aplicara varas de medir distintas según la procedencia étnica, la cultura o la religión de los grupos minoritarios.

Y la Unión necesita una política de seguridad propia y común, más allá de que las posibles fuerzas de intervención rápida puedan estar formadas por unidades que dependan también de la Alianza Atlántica.

Prescindiendo de precipitadas declaraciones, es poco probable que a corto plazo los países de la CEI vayan a integrarse en el mecanismo de seguridad colectiva de la OTAN, pues las disputas por el desarrollo de sus propias fuerzas armadas apuntan hoy por hoy en otro y muy preocupante sentido. La grave posibilidad de que proliferen los conflictos regionales, en una situación de tendencial repliegue norteamericano, deja en manos de la propia Unión Europea decisiones y actuaciones que pueden ser fundamentales para el mantenimiento de la paz en Europa. Una fuerza de intervención rápida (en la que debería estar España junto con Francia y Alemania) sería un elemento mínimo de autonomía europea en este aspecto.

Y desde otro punto de vista, el ejemplo de la Unión Europea, si desarrolla una política exterior y una política de seguridad comunes, puede ser decisivo para la inversión de la tendencia centrífuga que hoy sufre la CEI. Independientemente de los riesgos que para Europa occidental se puedan derivar del descontrol sobre el armamento nuclear de la antigua Unión Soviética (riesgos, por cierto, muy reales), es evidente que la dispersión militar y diplomática de la CEI es contraria a una racionalización de la convivencia europea. Pero mal se podría esperar que la CEI, aún bajo los efectos del big bang de agosto, coordine su diplomacia y unifique sus fuerzas armadas si la Unión Europea, con largos años de rodaje, no es capaz de dar un ejemplo eficaz y atractivo en este campo.

Es preciso crear los mecanismos que aseguren una política exterior y una política de seguridad comunes.

El ejemplo de la Unión Europea puede ser decisivo para la inversión de la tendencia centrífuga que hoy sufre la CEI.

Si la tenacidad en la racionalidad parece la mejor apuesta frente a los desafíos del nuevo mapa de Europa, otro tanto puede decirse en lo que se refiere al modelo de sociedad. Tanto el colapso comunista como la derrota electoral de la socialdemocracia sueca han sido utilizados en meses recientes para hablar del final de la era socialista, lo que implica ya el notable equívoco de tomar por socialistas a los regímenes de tipo soviético. Pero nadie parece haber reparado en el empantanamiento en el que se encuentra la economía de Estados Unidos como consecuencia de sus locos años 80, ni en la grave recesión que sufre Gran Bretaña.

Es posible que la última década del siglo no traiga el final del socialismo, sino el final del modelo neoconservador. El precio de la crisis y los ajustes convulsivos en el Este probablemente se traduzcan en una pérdida de credibilidad del mensaje neoliberal, como es probable que el estancamiento norteamericano conduzca al replanteamiento de algunos de sus dogmas. El mismo hecho de que la recesión en Estados Unidos haya dejado sin fuerza a la economía mundial parece mostrar que la dinámica de crecimiento de los años 80 (el comercio entre el Pacífico, Europa y Estados Unidos) tenía una base demasiado estrecha, y que un relanzamiento duradero exige un crecimiento compartido entre el Norte y el Sur.

Esa es la aspiración de los socialistas: crecimiento con equidad en cada país, crecimiento compartido a nivel mundial. El crecimiento económico desigual y polarizado, en Estados Unidos y en el mundo, no parece haber llevado más que al endeudamiento y la pérdida de competitividad de la economía norteamericana, y ahora al estancamiento de la economía mundial. Puede ser el momento de recordar que el modelo socialdemócrata de sociedad no sólo es más justo, sino que permite un crecimiento más equilibrado y sostenido a medio plazo.

España ante el fin del siglo

Ese es el proyecto que pretendemos seguir desarrollando en España. Construir un Estado moderno, sólido, respetado internacionalmente, protagonista de la construcción europea, partícipe en el diseño de un nuevo orden político mundial y socialdemócrata, es decir, que combine libertad y eficiencia económica con equidad y justicia social. Cómo lograrlo debería ser el centro de nuestro debate nacional al menos en la parte que afecta a los intereses generales del país al margen de los postulados ideológicos. Parece este empeño imposible porque estamos entretenidos en otras cuestiones, más propias de jueces y tribunales, pero que no constituyen el debate sustancial sobre nuestro futuro.

España tiene ante sí una oportunidad histórica irrepetible y los socialistas no estamos dispuestos a desperdiciarla por mucho que sea el ruido que hacen los demás tratando de descalificar globalmente un proyecto desde la incapacidad para generar alternativas creíbles socialmente.

Los socialistas vamos a dedicar nuestro esfuerzo a resolver los problemas reales del país que agrupo en cuatro grandes cuestiones:

1. Sentar las bases para alcanzar la convergencia económica, la nominal y la real, con los países más avanzados de Europa, siendo conscientes de que de su logro dependerá en buena medida nuestro futuro como país. Asimismo, deberemos proseguir el esfuerzo nacional para acercar nuestras infraestructuras a las de los países punteros de Europa.

- Modernizar la Administración y lograr que los servicios públicos funcionen, sean eficaces y ofrezcan calidad a los ciudadanos.
- Consolidar la descentralización política y administrativa mediante el pacto autonómico.
- 4. Continuar el desarrollo de nuestras políticas sociales, con especial atención al plan que pretende resolver las dificultades de los españoles a la hora de adquirir su primera vivienda, o acceder a una en alquiler que no suponga un porcentaje de renta salarial tan elevado como en la actualidad.

Y, además de ello, vamos a renovar nuestro programa político para las próximas décadas, desde la convicción de que la próxima década será también socialista, no sólo por nuestros méritos sino también por la beocia de la que hace gala día a día el primer partido de la oposición, que fundamenta su discurso exclusivamente en dos mensajes mediante los cuales no se puede construir una alternativa.

- Uno, que el proyecto socialista está agotado. Lo dicen, incluso, cuando el Partido Socialista recibe un respaldo popular casi del 40%, como ha sucedido en las elecciones municipales y autonómicas. Si con estos apoyos electorales nuestro proyecto está agotado, el de la derecha murió sin ver la luz.
- El otro eje es el discurso que pretende crear la imagen de una España en la que impera la corrupción, discurso que se fundamenta en la desesperación que produce la

Esta es la aspiración de los socialistas: crecimiento con equidad en cada país, crecimiento compartido a nivel mundial.

penuria de ideas, la falta de liderazgo y que, además, choca frontalmente con la realidad del país.

La realidad del país es otra. España ha compatibilizado crecimiento y equidad. A partir de 1986 hemos crecido a tasas superiores a las del promedio de la Comunidad Europea, lo que se ha traducido ya en mayor equidad por la creación de 1.700.000 empleos. Pero además ha aumentado el poder de compra de los asalariados, al crecer los salarios desde 1985 por encima de la inflación (una ganancia real acumulada de diez puntos por persona y mes, en promedio).

No sólo la economía se ha recuperado, y con ello ha aumentado el bienestar social. Ha habido también una política social sistemática en favor de los más desfavorecidos que se traduce en un incremento del poder adquisitivo de las pensiones y en el número de éstas (en 1,7 millones). La pensión media de la Seguridad Social ha pasado de 19.857 ptas. al mes en 1982 a 48.553 en 1991, y con la introducción de las prestaciones no contributivas se ha cerrado casi el abanico de la protección social. El consiguiente esfuerzo ha supuesto que el gasto en pensiones se ha triplicado.

Por otra parte ha aumentado en 630.000 el número de trabajadores que perciben el seguro de desempleo, y el número de becarios en 546.000. Todo ello a la vez que se universalizaba en la práctica la cobertura de la sanidad pública (que hoy llega a 38,4 mi-

Estamos entretenidos en cuestiones, más propias de jueces y Tribunales, pero que no constituyen el debate sustancial sobre nuestro futuro.

llones de personas) y la educación hasta los 16 años. Esa política social se ha compatibilizado con el control del déficit gracias al incremento de la presión fiscal (del 27 al 35% del PIB), especialmente gracias a la lucha contra el fraude.

El resultado es doble. Por una parte la sociedad española está hoy en mejores condiciones para elegir su futuro. La escasez, la enfermedad o la ignorancia ya no son losas que pesen sobre nuestro país como lo hicieran en el pasado. Ciertamente nos queda mucho camino por recorrer para llegar al nivel de los países más desarrollados de la Unión Europea, pero, si se piensa en que todos estos avances se han logrado partiendo de una profunda crisis económica, no cabe asombrarse de que para muchos países aparezcamos hoy como un ejemplo a imitar, un punto de referencia.

Pero hay un segundo aspecto de este camino de crecimiento con equidad: las dificultades que atraviesa la economía mundial desde la guerra del Golfo nos han afectado en menor medida que a otros países precisamente porque tenemos una demanda solvente mejor distribuida, con una mayor estabilidad en el consumo, que puede parecer excesivo a las personas de temperamento austero y tener efectos negativos sobre la balanza comercial, pero permite que nuestra economía siga creciendo por encima de la media europea.

No hay que engañarse: las perspectivas de la economía mundial para 1992 son poco

prometedoras, y eso nos va a afectar también a nosotros. Pero las diferencias entre las dificultades que deberemos afrontar y las que encontraríamos si hubiéramos seguido una política neoliberal, sin extender la protección social ni crear condiciones de equidad a través del gasto público, son las que separan a una economía y una sociedad integradas y en desarrollo de una sociedad desigual y empobrecida como la que han creado los ajustes económicos salvajes en muchos países del Este o de América Latina.

Lo más paradójico en este punto es que la derecha española no ha hecho la menor reflexión sobre la recesión británica o norteamericana, después de haber puesto como ejemplo la política económica de Thatcher o Reagan. Un primer razonamiento que se le ocurre a cualquier observador es que la polarización de las rentas que trajo la receta neoliberal de bajar los impuestos y recortar las prestaciones sociales puede estar en la raíz del problema. La atonía del consumo podría ser consecuencia de una mala distribución del crecimiento de los años 80 en Gran Bretaña y Estados Unidos, mientras que la continuidad del crecimiento español se podría deber a la política de redistribución.

Pues bien, la misma derecha española que auguraba desastres para nuestra economía por el irresponsable crecimiento del gasto público guarda ahora un estrepitoso silencio sobre el déficit público en Estados Unidos, o sobre la recesión con inflación en Gran Bretaña. Si la realidad no respalda la eficacia de las recetas neoconservadoras, si la economía británica registra una inflación superior a la española (a la vez que su PIB cae en un 2% mientras el nuestro crece en un 2,6), se habla de otra cosa y se acabó. Pero los hechos están ahí: con una política de redistribución la economía española ha podido seguir creciendo en un contexto internacional de estancamiento, y si en 1992

comienza la recuperación de la economía mundial, España estará en condiciones más favorables que los países que optaron por crecer a costa de recortar el gasto social.

Hay varias consecuencias que me parece necesario subrayar. La primera es que 1992, un año tan cargado de protagonismo para España, puede ser simbólicamente la fecha de nuestra puesta de largo, precisamente porque ni la Olimpiada de Barcelona, ni la Exposición Universal de Sevilla, son meros alardes propagandísticos que contrasten con una sociedad y una economía en crisis, sino que constituyen la plasmación de un esfuerzo de modernización e inversión pública que ha cambiado el país de arriba abajo. Más allá de la legítima crítica política, se debería reconocer lo que cualquier viajero bienintencionado dice espontáneamente: España ha cambiado sustancialmente en una década de Gobierno socialista.

La segunda es que políticamente no podemos ver en 1992 sólo la conmemoración del Quinto Centenario de la llegada española a América. El mismo carácter ejemplar que muchos observadores atribuyen en América Latina a la experiencia española de esta década nos exige hacer un esfuerzo para que la sociedad de nuestro país descubra la realidad latinoamericana, superando la imagen negativa de la crisis económica y social (por más que ésta responda en bastantes casos a una dolorosa realidad), y advirtiendo la inmensa potencialidad de un continente recuperado para la democracia y que, en su conjunto, parece estar recuperando el pulso económico para retomar una dinámica de crecimiento.

Hay que admitir que, más allá de la identificación sentimental, en España se conoce poco y mal a América Latina. La cumbre iberoamericana de 1992, que continúa en España la línea abierta el pasado año en Guadalajara, México, debería ser vivida

Si con estos apoyos electorales el proyecto socialista está agotado, el de la derecha murió sin ver la luz.

como un momento políticamente importante por la opinión pública española. Mejor es, desde luego, que nuestros países se encuentren para mirar juntos al futuro que enredarse en discusiones estériles sobre los desencuentros del pasado. Pero también en este sentido hay que señalar la notable irresponsabilidad de la derecha española, que parece dispuesta a sacrificar la imagen de España para arañar los votos que no le puede dar su inexistente alternativa programática.

En efecto, se diría que la derecha teme que 1992 sea el año de España, pensando sólo en la posible capitalización electoral que pudiera realizar el Gobierno socialista. Sin demasiada visión de Estado, la derecha española ignora los intereses comunes que unen a nuestro país con América Latina, y denuncia cualquier política de encuentro de la comunidad iberoamericana como mera distracción de los asuntos internos. Se critica la Exposición Universal de Sevilla, como si se deseara su fracaso, y se busca empañar la imagen del país en el exterior con la acusación generalizada de corrupción. Que el efecto de esta absurda y miope política pueda ser la pérdida de la credibilidad internacional de España, que pueda retraer a los inversores y dañar a los intereses colectivos, son cuestiones secundarias una vez que se ha decidido que todo vale para acabar con un Gobierno que mal podría ser criticado por el balance global de su gestión.

La tercera consecuencia que querría subrayar es que lo logrado en estos años, los

No sólo la economía se ha recuperado, ha habido también una política social sistemática en favor de los más desfavorecidos.

avances hacia un modelo de sociedad más próspero y más solidario, son en buena medida fruto de un Gobierno democrático con amplio apoyo popular, apoyo que ha permitido mantener una política coherente y estable. Una vez más, la tenacidad en la racionalidad.

Debemos ser autocríticos. Mucho debemos esforzarnos en mejorar la esfera de lo público. Me refiero a la modernización y funcionamiento de la Administración y a la eficacia y calidad de los servicios públicos. Las críticas que se nos hacen en este terreno son razonables, aunque también es cierto que frente a las mismas se puede argumentar que el aumento del bienestar genera más exigencias sociales en el funcionamiento de los servicios públicos; que los socialistas hemos universalizado la prestación de los mismos; que no todo puede hacerse en nueve años de Gobierno socialista y que no son estos problemas que afectan sólo a España.

La necesidad de controlar el déficit para crecer establemente pone a todos los países ante el reto de mejorar los servicios públicos sin aumentar espectacularmente el gasto. Los cambios sociales y económicos de los años 80 han creado también un desfase entre unas Administraciones públicas que evolucionan lentamente y una sociedad muy cambiada, que exige agilidad, eficacia y responsabilidad en los representantes del Estado. España tiene hoy este desafío porque se ha convertido también hoy en un país moderno y desarrollado: los

países que no han tenido tanta suerte no se plantean la modernización de la Administración o de los servicios públicos, sino la forma de pagar la nómina a fin de mes, de despedir a los funcionarios o de desmantelar o privatizar los servicios públicos.

Frente a este reto, parece evidente que la respuesta viene por la racionalización de la gestión y la responsabilización de los representantes de la Administración. No estamos ante un problema ideológico, sino ante un problema muy práctico, y quizá por ello se advierten coincidencias en las propuestas de Gobiernos de signos distintos. Permítanme avanzar algunas ideas sobre la reforma de la Administración y la mejora del funcionamiento de los servicios públicos. Una primera propuesta es la autonomía de las unidades administrativas. Una vez definidos los objetivos políticos globales, y asignado el presupuesto, su empleo debe quedar abierto a la prioridades de cada unidad de gestión.

Esta autonomía en el uso de los recursos debe en buena lógica incluir la política de personal. Se requieren probablemente criterios generales de selección (mecanismos de habilitación), pero se debe dejar que cada unidad decida el perfil de los profesionales que requiere, y que incentive su dedicación a través del salario, dentro de los límites fijados por convenios globales. Puede ser difícil de aceptar, pero mientras los gestores privados estén escandalosamente mejor remunerados que los gestores públicos se podrá temer que sólo una minoría guiada por convicciones personales se dedique, entre los más capaces, a la función pública.

Una tercera propuesta es que la reforma de la Administración y los servicios públicos se haga a través de la concertación con los sectores implicados. Si quienes deben llevar a cabo el trabajo diario se sienten perjudicados o marginados en la reforma, ésta no podrá funcionar. Y no basta

con vincular la remuneración al rendimiento: es preciso también un alto grado de consenso sobre los objetivos.

Las experiencias de casi dos décadas nos dicen que el Estado que mejor puede favorecer la eficiencia y la equidad social no es un Estado demasiado grande ni el Estado mínimo de la ideología neoconservadora, sino un Estado fuerte y compacto, suficientemente fuerte para conseguir que a través del mercado se cumplan los objetivos sociales y lo suficientemente compacto como para impedir que a través de una burocracia demasiado extensa, sin motivaciones y diluida en el anonimato, se despilfarren recursos y se eludan responsabilidades.

Hay cuestiones que pueden parecer formales, pero no lo son. Los funcionarios deben ser interlocutores identificables, la cadena de responsabilidades debe ser transparente, el error o el mal servicio deben ser compensados. Es preciso que los ciudadanos sientan que la Administración es algo próximo y asequible, que está ahí para el cumplimiento de sus derechos, pues sólo cuando los derechos de ciudadanía se convierten en algo tangible y satisfactorio cabe esperar que los ciudadanos asuman también sus responsabilidades. Por ello vamos a reflexionar sobre un código que regule y ampare los derechos de los ciudadanos frente a la Administración.

Si queremos que la acción pública sea atractiva, si no queremos una sociedad políticamente apática y desinteresada de lo público, debemos mostrar que los bienes públicos son valiosos, que su gestión es socialmente importante, que la transparencia debe ser su norma. Ya no existe la España caciquil y clientelar de la Restauración, pero es necesario que lo hagamos evidente para todos. Se han dado ya pasos adelante, por cierto. Nadie recuerda que hace pocos años cobrar una pensión de jubilación o viudedad era cosa de meses, y que ahora es casi auto-

Con una política de redistribución la economía española ha podido seguir creciendo en un contexto internacional de estancamiento.

mático. O sólo lo recuerdan las personas mayores, pero su apoyo al Gobierno socialista se dice que es un reflejo conservador. Es ingenioso, pero bastante injusto.

El apoyo social al proyecto socialista durante estos años tiene varias raíces. Una muy importante es la identificación política de un gran número de españoles con los valores del socialismo democrático, una identificación que en unos casos sobrevivió a los largos años de dictadura y en otros nació precisamente de la búsqueda de una alternativa progresista y democrática para salir de aquel régimen. Hay que decir que a quienes vivieron la guerra o la dictadura, sin libertad ni más recurso que el escaso pago de su trabajo, el socialismo les da dado pensiones dignas, incluso para quienes no cotizaron, sanidad pública y un futuro cierto para sus familias. No es extraño que muchos de ellos voten al Gobierno socialista: si se le quiere llamar conservadurismo es cuestión de opiniones.

Pero otra raíz muy importante del apoyo social que han encontrado los sucesivos Gobiernos socialistas es la propia coherencia y consistencia del proyecto. Tras el vacío político que dejara el estallido de UCD, muchos españoles apostaron por el PSOE en busca de un partido serio y unido en torno a un proyecto político, que pudiera impulsar las reformas y la modernización a la vez que garantizar la gobernabilidad.

Nuestros rivales electorales son muy conscientes de que ese es uno de los motivos de nuestra credibilidad: la solidez y la seriedad del partido y del proyecto que impulsa. Y por ello subrayan los menores síntomas de diferencias internas dentro del Partido Socialista, y si es preciso están muy dispuestos a imaginarlas o inventarlas. No es una mala táctica, porque si nos esforzamos por mostrar nuestra cohesión interna pueden acusarnos de monolitismo, y si no lo hacemos pueden hablar de una grave crisis interna en la organización socialista.

No tiene sentido lamentarse de que sea así. Puesto que los demás partidos del arco parlamentario saben que difícilmente pueden ofrecer una imagen de mayor coherencia interna (sin siquiera haber experimentado el esfuerzo de nueve años de Gobierno), sino que se han visto sacudidos por interminables y conflictivos procesos de renovación de sus dirigentes, o por incomprensibles discusiones sobre la transmigración del alma de sus partidos, es lógico que por afirmar una imagen propia de solidez prefieran tratar de erosionar la nuestra, amplificando nuestras discusiones con la esperanza de hacer olvidar el alboroto perpetuo en que transcurren las suyas.

Desgraciadamente, hay otro juego político que se utiliza cada vez con mayor irresponsabilidad contra la imagen de seriedad del PSOE: me refiero a las acusaciones de corrupción. En primer lugar debo insistir en lo evidente: se pretende generalizar a partir de casos muy concretos (y para los que debería contar en principio la presunción de inocencia hasta que hubiera sen-

La derecha española parece dispuesta a sacrificar la imagen de España para arañar los votos que no le puede dar su inexistente alternativa programática. tencia judicial) para descalificar a los militantes socialistas en su conjunto. Esto revela una grave irresponsabilidad, sobre todo viniendo de políticos que prometen practicar, si llegan al Gobierno de la nación, lo que ya es claro que no practican desde algún Gobierno autonómico.

La derecha política española no tiene sentido del Estado. Lo pienso desde hace tiempo y cada día me reafirmo más en ello. La derecha económica tiene más sentido del Estado que quienes pretenden representarles políticamente. Posiblemente porque el liderazgo político de la derecha es tan dependiente de los avatares electorales, y son tantos los agazapados a la espera de un mal resultado electoral, que se elige el regate en corto, y la estrategia de la erosión en la que vale todo, con tal de restar algunos votos al Partido Socialista.

Se podrá argumentar que la política es así, que tiene un componente de suciedad para intentar derrotar a los adversarios. No lo sé. Me gustaría pensar que no, o que no debería ser así. Pero, en todo caso, me parece una gran irresponsabilidad cuestionar no ya al Partido Socialista, sino a las instituciones democráticas de las que nos hemos dotado, y la vida pública en general. Es imposible consolidar un Estado de Derecho poniendo bajo sospecha a las instituciones y a los partidos políticos en general. El Tribunal Constitucional, el de Cuentas o cualquier órgano de la judicatura no pueden ser cuestionados en su legitimidad en función de si sus veredictos nos dan o no la razón o se ajustan a nuestras previsiones. La realidad periodística no puede suplantar a la realidad judicial. Una persona es culpable o inocente cuando lo determina un Tribunal, no un periódico. Estoy de acuerdo -sin que sirva de precedente- con un reciente editorial de un periódico nacional en el que se afirmaba: «Resulta antijurídico abrir un sumario, recordar que no hay inculpación formal y por tanto no hay procesamiento, y

sin embargo, por la puerta de atrás, incriminar conductas —empresas presuntamente compradoras de facturas falsas— delictivas. Estamos en presencia de un procesamiento paralelo». Este principio de funcionamiento del Estado de Derecho, que comparto, hay que aplicarlo no sólo cuando el afectado es un medio de comunicación, sino también, y fundamentalmente, cuando son personas, ciudadanos que tienen derecho a la presunción de inocencia, y a no ser sometidos a juicios paralelos.

Nosotros siempre hemos tratado de evitar que los casos individuales de deshonestidad, presunta o comprobada, se transformaran en deslegitimación colectiva: las personas pueden equivocarse o delinquir, pero sus responsabilidades no pueden ser proyectadas a ningún colectivo, o al menos no deberían serlo por quienes dicen hablar en nombre del interés general. El hecho de que en Cantabria haya hoy un Gobierno en libertad bajo fianza no nos puede conducir a los socialistas a cuestionar ni la honestidad de un colectivo, en su conjunto (PP), ni de sus militantes. A lo sumo sí a juzgar la doble moral de quien lo ha tolerado y nos acusa a diario de corrupción. Sin embargo, esta derecha política populista e irresponsable sí intenta hacerlo con las siglas de un partido que forma parte de la historia de España, y cuyos militantes, a lo largo de más de cien años de historia, conocieron pocos de libertad porque la derecha autoritaria de este país se lo impidió, los persiguió o los encarceló.

Ya he dicho, en ese sentido, que creo imprescindible una voluntad colectiva de esclarecer los supuestos casos de corrupción, tanto para erradicar los delitos concretos que puedan demostrarse como para depurar la posible responsabilidad política y eliminar las condiciones en que puedan producirse. Pero también creo que sería precisa una voluntad colectiva de evitar que la corrupción (o la sospecha de corrupción) Se ha decidido que todo vale para acabar con un Gobierno que mal podría ser criticado por el balance global de su gestión.

pueda utilizarse como un arma arrojadiza entre los diferentes partidos, ya que éste es un peligroso juego para la misma vida democrática. Y me parece más que lamentable el hecho de que cualquier llamada contra la demagogia pueda ser casi automáticamente entendida como propuesta de un pacto de silencio y ocultación.

Pero hay que subrayarlo: el problema hoy es que se está generalizando un clima de sospechas de corrupción que deslegitima a los partidos como instrumentos del quehacer democrático. Resucita una retórica del pasado que descalifica a los políticos como categoría social, mientras se ignora el esfuerzo colectivo que los políticos españoles han hecho durante más de quince años por crear un ambiente de convivencia pacífica.

Por lo demás, creo que cuando se contemple esta etapa con perspectiva histórica se comprobará que lo que la caracterizó fue una gran honestidad de los hombres públicos.

Frente a esta descalificación colectiva de la política democrática hay que recuperar la dignidad y la responsabilidad del compromiso con lo público, tratar de hacer evidente, desde el Gobierno y los partidos, que la acción pública es una noble apuesta por lo colectivo frente al interés particular. Y que en una sociedad cada vez más compleja y diferenciada, individualizada y sometida a los desafíos de un mundo que cambia vertiginosamente, el sentido de comunidad, de

sociedad basada en los valores comunes de la ciudadanía, sólo puede venir de una actividad política honrada, racional y tenaz.

Permítanme que vuelva a hablar de la derecha española. A diario somos objeto de todo tipo de descalificaciones por parte de sus dirigentes. La mayor parte de las veces no contestamos porque no estamos interesados en que la derecha española tenga que proceder a una nueva refundación. Hemos esperado pacientemente a que un dirigente joven pudiera consolidarse. Pero todo tiene un límite y creo que ya ha sido traspasado.

La cúpula del Partido Popular ha sido copada por personas que no merecen ni siquiera crédito para la derecha económica del país, que no tienen proyecto político y que sustentan su discurso en la demagogia populista. Una derecha que rechaza un pacto de competitividad-progreso reclamado por los empresarios —también por los socialistas— para poner a punto nuestro aparato productivo ante los retos del mercado interior comunitario. Una derecha que llama a la insumisión fiscal, que ante la crisis del sector minero afirma que en Hunosa no sobra ningún trabajador, sino que lo que sobra es el Gobierno; una derecha que subasta al alza las reivindicaciones autonómicas a expensas de la solidaridad nacional; una derecha que propone la supresión de los Gobernadores Civiles; una derecha que critica las celebraciones del Quinto Centenario y las Olimpiadas que tendrán lugar en Barcelona; una derecha que cuestiona acciones internacionales de la

Los funcionarios deben ser interlocutores identificables, la cadena de responsabilidades debe ser transparente, el error o el mal servicio deben ser compensados.

Jefatura del Estado que cualquier aprendiz de política internacional aplaudiría por ser beneficiosas para los intereses de España; una derecha que nos acusó de ayudar económicamente a Cuba, de connivencia con el dictador cubano, y que después lo abraza por delante y por detrás, a la mañana, al mediodía y a la noche; una derecha que tolera un gobierno autonómico en libertad bajo fianza y al mismo tiempo anuncia que hay que establecer una nueva ética en la vida pública del país. En fin, no quiero seguir. Todo vale, y nada puede sorprender en quienes se abstuvieron en el Referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN porque para ellos era más importante poner en aprietos al Gobierno socialista que definir el papel internacional de España sobre una base de consenso nacional.

En el fondo de la irresponsabilidad de la derecha española ante la legitimidad democrática y el futuro de España es fácil ver una ilusión: los socialistas han modernizado el país, han recuperado la economía, han asentado la democracia. Ahora ya podemos volver a gobernar los de siempre. Parece que no. Primero deben demostrar que tienen un programa alternativo y un partido serio, y no es fácil que lo logren. Pero, en segundo lugar, deben hacerse a la idea de que hemos cumplido una etapa y entrado en un tiempo nuevo, pero que tenemos ideas y voluntad para seguir gobernando España mientras los ciudadanos no piensen otra cosa.

Vamos a agotar la legislatura, aunque la derecha española pueda agotar a la opinión pública amenazándola con elecciones anticipadas. Y lo vamos a hacer porque tenemos claros los retos sociales y la respuesta para ellos. Vamos a proponer una carta de los derechos de los ciudadanos para crear una Administración y unos servicios públicos transparentes y eficaces, y vamos a crear una nueva cultura política en la que la acción pública recupere su valor frente a quienes sólo defienden el interés particular.

Y vamos a decirle a la sociedad española que la convergencia en Europa no es una cuestión de burócratas y economistas, sino el mayor desafío para nuestro país desde hace quinientos años. Que podemos poner a España en el pelotón de cabeza de la Unión Europea, cumpliendo las condiciones de convergencia en el terreno de la inflación, del déficit, de los tipos de interés, y a la vez seguir creando empleo. Que vamos a ser el ejemplo, para los socialistas y para cualquier persona sensata, de un país que crece en libertad y en equidad, más allá de los errores personales que hayamos podido cometer.

Porque somos un partido nacional podemos asumir el Estado de las autonomías sin complejos, porque representamos a quienes viven de su trabajo podemos compatibilizar la racionalidad económica global con los intereses del trabajador de a pie, porque tenemos un proyecto de futuro (una España próspera y sin desigualdades, en un mundo en crecimiento compartido) podemos dar a España su merecido protagonismo exterior.

La derecha puede decir lo que quiera, que lo haría mejor, que no tendrían nuestros fallos. De su programa no sabemos nada, de sus homólogos sabemos que han quebrado la economía y la educación (el futuro de sus países).

Creo que el proyecto socialdemócrata seguirá vigente durante muchos años en España porque responde a una demanda seria de progreso, crecimiento económico, redistribución de la riqueza y justicia social. No estamos exentos de errores y de ca-

Vamos a reflexionar sobre un código que regule y ampare los derechos de los ciudadanos frente a la Administración.

rencias y a veces los acontecimientos y cambios vertiginosos que se están produciendo en el mundo pueden superar nuestros análisis y diagnósticos. Pero la voluntad política de todo el Partido Socialista empeñado en el bienestar de nuestro pueblo y en que España desempeñe un papel protagonista en un mundo nuevo, apasionante, pero lleno de incertidumbres, sin duda suplirá las insuficiencias y limitaciones de quienes hoy lo dirigimos. Cualquier analista extranjero concluye sus comentarios resaltando la importancia del Partido Socialista para el futuro de España, bien sea gobernando o en la oposición, hipótesis ésta que no sucederá en breve; digo extranjero, porque quizá sea demasiado ingenuo pensar que se reconozca en ámbitos más cercanos. El esfuerzo de un Partido que, siendo republicano, aceptó, respetó y defiende la monarquía parlamentaria, al que a los cinco años de vida democrática le correspondió gobernar España en unas circunstancias de gravísima crisis política y económica, sin ninguna experiencia de la gestión pública, y que ha situado a España en el lugar que hoy ocupa en Europa y en el mundo, nos hace a los socialistas sentirnos orgullosos del trabajo realizado, sin duda mejorable en múltiples aspectos como toda obra humana.